

MOISES GONZALEZ NAVARRO

Nativo de Guadalajara, Jal., en donde nació el 6 de marzo de 1926.

Abogado, historiador consagrado a la historia social. Dirige el Seminario de Historia Moderna del Colegio de México.

Ha publicado: *Vallarta y su ambiente político-jurídico* (1949); *El pensamiento político de Lucas Alamán* (1952); *Repartimientos de indios en la Nueva Galicia* (1953); "Instituciones indígenas del México independiente" (1954); "La política colonizadora en el Porfiriato" (1954); *Vallarta en la Reforma* (1955); *Estadísticas sociales del Porfiriato* (1956); *Historia moderna de México, El Porfiriato, La vida social* (1957); *La colonización en México* (1960), y numerosos artículos en revistas especializadas.

Fuente: Moisés González Navarro. *La colonización en México, 1877-1910*. México, Talleres de Impresión de Estampillas y Valores, 1960. VII-160 p., p. 1-9.

LA COLONIZACION DE MEXICO

Población escasa y deficiente, y tierra abundante, fértil y baldía, eran las dos premisas en que se basaba la necesidad de atraer la inmigración extranjera que pasara de la potencia al acto las legendarias riquezas del país. Instrumento de esta acción fue la política colonizadora del porfiriato, que, en términos generales, puede caracterizarse de la siguiente manera: atraer por cuenta del gobierno a los colonos; dotarlos de tierras, compradas a los particulares, primero y, después, tomadas de los baldíos; pagarles el transporte y refaccionarlos con los implementos necesarios. Más tarde, y ante los fracasos de la colonización oficial y la prosperidad de algunas de las colonias creadas por particulares, el gobierno aseguraba que la colonización oficial sólo había buscado dar ejemplo y estímulo a las empresas privadas y hasta inducir a los colonos a que vinieran por cuenta propia, como ocurría en Argentina. El gobierno renunció a la colonización oficial al final; reconoció su fracaso, y afirmó que ayudaría con la remoción de los obstáculos mayores, es decir, con medidas indirectas que facilitarían la colonización privada.

Vicente Riva Palacio, como ministro de Fomento, inquirió en agosto de 1877 de los gobernadores de los estados las posibilidades de la colonización; en la parte inicial de su cuestionario expuso la política oficial declarando que el gobierno estaba resuelto a “hacer toda clase de sacrificios para atraer a los extranjeros honrados y laboriosos y procurar su establecimiento y radicación en nuestro privilegiado suelo”. En su *Memoria* de ese año, Riva Palacio explicó que sus recursos naturales hacían a México un país riquísimo, si bien la escasez de brazos impedía explotarlos. Era, entonces, necesaria la inmigración; pero atraerla requería fuertes desembolsos, cosa imposible para un gobierno que, como el de Díaz, apenas se iniciaba. Eran menester también comunicaciones fáciles y baratas y que la masa del pueblo sintiera las necesidades de una civilización moderna. Pudo surgir la duda de que si era necesario esperar a que se dieran esas condiciones, y no fueran los colonos mismos quienes las conquistaran, ¿a qué venían cuando ya estuvieran resueltos los problemas más arduos?

La Libertad aprobó el celo con que Riva Palacio acometió el problema de la colonización, pues era “axiomática” su necesidad para consolidar la paz y crear un gobierno fuerte capaz de una acción homogénea que condujera pronto a ampliar las vías de comunicación, suprimir las alcabalas, acabar con los malhechores, etc. El ingeniero José Covarrubias explicaba en 1907 que para atraer la inmigración se requerían ciertas condiciones previas: algún grado de explotación de la riqueza pública, fáciles comunicaciones, pues era en balde esperar, como hasta entonces, que la inmigración creara esas condiciones.

Era condición del buen éxito de la colonización que el problema de las comunicaciones, estuviera ya resuelto, en particular con los ferrocarriles, otras, a la inversa, juzgaban que del éxito de la colonización iba a depender el de las comunicaciones; mientras Justo Sierra creía ver en todo esto un círculo vicioso, Enrique Chávarri, “Juvenal”, pensaba en 1880 que los ferrocarriles, al abreviar las distancias, harían “efectiva la colonización”, la “savía” de la colonización, en efecto, debería seguir al tendido de las vías férreas, pues empleando inteligencia, actividad y dinero, ellas transportarían bien pronto a México los inmigrantes que por ahora iban a Estados Unidos. Luis del Toro dudaba todavía en 1896 que los ferrocarriles carecían de una sólida base sin la inmigración. Justo

Sierra creyó que al iniciarse en 1884 la construcción de grandes líneas troncales de los ferrocarriles, se había roto ya el círculo vicioso.

El presidente Díaz reconoció en 1880 que hasta entonces no había tenido buen éxito la colonización, si bien confiaba en que al ser conocidos en el extranjero los recursos del país, surgiría una corriente de inmigrantes y, con ellos, el país lograría un precioso contingente de trabajo, capital e inteligencia. Para el ministro Carlos Pacheco, si el ideal era la inmigración privada, la ayuda inicial del gobierno era necesaria para fundar el prestigio de México; esa ayuda, con el tiempo, se pagaría con usura. En ese año de 1882, declaró que se habían llevado mexicanos a las colonias recién fundadas para ligarlas a la vida del país y asegurar el mestizaje. Muy poco tiempo después el entusiasta general Pacheco —“el secretario de Fomento más activo que ha tenido México”—, pedía el 10. de abril de 1883 a los presidentes municipales noticias sobre tierras para colonos, y explicaba que los grandes sacrificios pecuniarios hechos para traer colonos canarios e italianos demostraba que México acogía a los extranjeros. Traspuesto ese punto, Pacheco creía necesaria la inmigración atraída por particulares. El problema de la falta de tierras, sin embargo, quedaba en pie, pues ni el gobierno podía comprarlas, ni podía esperarse el término del deslinde de los terrenos baldíos.

El general González explicó, al terminar en 1884 su período, las dificultades de los primeros ensayos colonizadores hechos por Pacheco con italianos, en una forma que contrasta con el optimismo de su ministro. Atribuía el fracaso a que los colonos creyeron que los fondos públicos, y no su esfuerzo propio, resolverían todos los problemas; esto, unido a la crisis por que pasó la economía oficial, desorganizaron las colonias, aun cuando algunas pudieron sobrevivir.

Carlos Pacheco, en un documento escrito en 1887 para defender la colonización de Baja California, cuya redacción se atribuyó a Bulnes, Sierra y Sosa, contrarió algunos puntos de su programa inicial. Afirmó, por ejemplo, que la población nacional no podía aumentar por el simple movimiento natural porque los indios disminuían de una manera rapidísima, y el número de mestizos, aun cuando crecía, no bastaba a compensar la pérdida de la población indígena; así el aumento de nuestra población en los últimos 20 años, se debía principalmente a la inmigración: “si cerramos nuestros puertos y

nuestras fronteras, la despoblación del territorio sería tan rápida como segura". Lo cierto es que la población mexicana crecía por la excedencia de la natalidad sobre la mortalidad. a pesar de que en algunos casos las cifras del registro civil indujeran a creer lo contrario; además, la inmigración era, ya desde entonces, inferior a la emigración. Cuando se planteó una vez más el dilema, se declaró, en desacuerdo con su programa anterior, por la inmigración oficial y no por la privada, y con un optimismo consecuente con su errada idea sobre por qué aumentaba la población en México.

Pacheco, entre sus muchos planes, tenía el de pagar la deuda pública con el producto de la venta de los terrenos baldíos. Además, declaró que las primeras colonias —Súchil, Tenancingo, Huatusco, etc.— habían costado millón y medio de pesos, para confesar después que, si bien no los consideraba mal gastados, esas colonias apenas vegetaban, razón por la cual su prosperidad no era comparable con la de las colonias particulares establecidas en Baja California y Chihuahua.

El general Díaz salió más optimista de su segunda presidencia en 1888: el deslinde de las tierras nacionales se había promovido para favorecer la colonización; ésta se dejó a empresas privadas porque se convenció de que "la acción particular estimulada por el interés privado es mucho más eficaz que el oficial"; las colonias particularmente prósperas eran, en efecto, las que había creado la iniciativa privada, tales como la minera del Boleo, la de Todos Santos y la de Jicaltepec. Al hacer un balance de su tercera presidencia en 1892, habló satisfecho de que todas las colonias pagaban con regularidad los abonos de sus deudas, y que la "Manuel González" había liquidado ya toda su deuda, si bien la más adelantada era la de Topolobampo. Y, optimista:

"no pueden ser más satisfactorios estos ensayos. El gobierno aguarda que estas colonias agrícolas, así como las mineras, tomarán mayores creces, y alentados por el éxito nuevos colonos arribarán a nuestras costas, y una corriente de inmigración al poblar nuestro desierto territorio, y traerá elementos productores que fecundicen el rico suelo mexicano".

El ministro de Fomento Manuel Fernández Leal aseguró en 1896 que se abandonó la colonización oficial porque sus logros eran más lentos y costosos y menos eficaces que los de las compañías privadas. La situación de las colonias oficiales

era, sin embargo, buena: las de Ascensión, en Chihuahua, y Manuel González en Huatusco, Veracruz, se habían transformado en municipios: la Aldana había saldado su deuda con el gobierno y las “Porfirio Díaz” y “Diez Gutiérrez” pronto harían lo mismo. Fernández Leal, en pleno cambio de frente, que afectaba al tipo de colonización, antes oficial y ahora privada, y a la misma raíz de esos proyectos, se pronunció cautelosamente, por primera vez en un documento oficial, sobre el monto de la inmigración y las condiciones necesarias para su éxito:

“Hay que confiar... en que conjuradas esas calamidades (sequías y crisis monetaria y fiscal), tome cada día mayor incremento la inmigración y el establecimiento de extranjeros laboriosos, la repatriación de nacionales y la fundación de pequeñas propiedades, con lo que se acentuará cada día más la prosperidad de que felizmente disfrutamos. Conviene hacer notar que México no ha creído prudente llamar a los colonos en grandes masas, sin estudiar antes el asunto de la colonización con toda calma, a fin de evitarse decepciones y dificultades. Se han ensayado diversos sistemas y parece que el que se sigue, por medio de empresas particulares, es quizá el mejor. Se espera también el conocimiento de la situación financiera del país, de sus condiciones climáticas, de sus producciones, etc.”

Esta nota de reserva resulta ser la mayor crítica de la actividad colonizadora oficial, pues en buena medida se emprendió desdeñando esos datos cuyo conocimiento resultaba ahora fundamental y previo. Debió sorprender, además, que ahora se declarara que jamás se había creído prudente una inmigración cuantiosa, pues la verdadera ilusión del gobierno y de muchos particulares era ver llegar millares y aun millones de inmigrantes que descubrieran, arrancaran y explotaran las fabulosas riquezas nacionales. Debe recordarse, empero, que la política colonizadora también esperaba operar la repatriación de los mexicanos que vivían en Estados Unidos.

El presidente Díaz, cuando ya buen número de particulares, e incluso algunos funcionarios, como Fernández Leal y Matías Romero, habían enfriado algo el entusiasmo por nuestras legendarias riquezas, reafirmó en 1896 que el de México era un “territorio vastísimo y riquísimo, en cuyos ámbitos y en cuyas entrañas se contienen riquezas incalculables”; el requisito único y necesario para atraer brazos y capitales era el

orden. En cuanto a la política futura, coincidía con las orientaciones de su ministro Fernández Leal, la ayuda oficial se limitaría a medidas indirectas:

“Figuran evidentemente entre esos medios de preparación y entre esas facilidades, todos los actos del gobierno y todos sus resultados: la paz, la seguridad, la justicia, las vías de comunicación y los demás progresos materiales y sociales que el país ha podido realizar en estos últimos tiempos; figuran igualmente entre ellos la prosperidad financiera, el crédito, el equilibrio de los presupuestos, la cordialidad de las relaciones exteriores, etc.”

Empañada ya la ilusión en una inmigración ventajosa y fácil, Fernández Leal afirmó en 1900 que el gobierno nunca había creído posible una corriente migratoria, caudalosa, semejante a la de Argentina y Estados Unidos; en verdad, esos fueron los modelos que envidiaban. La primera explicación oficial de estas dificultades la dio Matías Romero como se verá después; si bien “Juvenal” entre otros particulares, la había apuntado; hasta ese momento, sin embargo, no era clara la nueva postura oficial. Para Fernández Leal, México no podía recibir una gran inmigración porque la meseta central estaba densamente poblada y no tenía tierras fértiles y bien regadas; no era nada fácil desviarla al Norte porque allí las tierras eran feraces, pero desiertas, insalubres y aisladas. Las dificultades crecían en la Mesa Central porque en ella predominaba una especie de trabajo servil, pues los peones trabajaban gustosos “por salarios increíblemente bajos y que apenas bastan para satisfacer las necesidades más apremiantes de la vida en un estado total rudimentario. La colonización se orientó por eso a darles tierras a los colonos, ya que no tenían ningún aliciente como jornaleros. El éxito del pequeño ensayo de colonización oficial hecho con italianos garantizaba al agricultor europeo que con un pequeño capital podía establecerse por su cuenta en México y ganar una buena posición. Fernández Leal resumía la política del gobierno asegurando que el papel de éste, “por ahora, consiste sólo en remover obstáculos y en facilitar a los inmigrantes no sólo el goce de aquellas garantías y derechos a que tendrían acción por su calidad de hombres, sino también la fácil y cómoda estancia entre nosotros como factores importantísimos de nuestro progreso”. El presidente Díaz reiteró que su política era promover indirectamente la colonización: “El problema de la colonización queda

de este modo resuelto como una consecuencia de la acción gubernamental sobre todos los demás ramos administrativos.”

José Castellot, director general de la Asociación Financiera Internacional, afirmaba, admirado, que los progresos de la inmigración en Estados Unidos, Argentina y Canadá, se debían a las muchas concesiones ofrecidas: México, que no había procedido así todavía, no podía competir con esos aventajados y felices países.

Olegario Molina, el último ministro de Fomento del porfirato, veía en el cotejo entre las prósperas colonias privadas y las oficiales, que apenas vegetaban, la conclusión definitiva de que el gobierno debía abstenerse de colonizar, dejando en manos de “los particulares, individuos o compañías, esa clase de negocios que están llamados, por su misma naturaleza, a dar mejores resultados en sus manos que en las de la administración pública”. Molina, sin embargo, hizo alguna reserva: no todas las colonias privadas habían alcanzado la misma prosperidad, porque algunas empresas “han preferido especular con los terrenos, más bien que poblarlos y cultivarlos”. Esa fue, precisamente, la lacra mayor de la colonización privada; pero a pesar de ella, superó a la oficial. Y como para Molina el problema de la colonización estaba intacto, nombró una comisión que propusiera los medios adecuados para resolverlo. Su pesimismo, empero, se acentuó más tarde, y, con él su visión del problema se aclaró: pese al estado satisfactorio de las colonias privadas, el problema de la colonización no se había resuelto todavía. De manera que del optimismo de Riva Palacio y Pacheco en los años iniciales del porfirato, se pasó al pesimismo de Olegario Molina, quien confesó el fracaso de la empresa colonizadora, lo mismo la oficial que la privada, porque ninguna de las dos adelantó la solución de los graves problemas demográfico y agrícola del país.

El presidente Díaz, al final de su gobierno, reconoció que si las colonias oficiales subsistían, era mayor la prosperidad de las particulares, y por esa razón el gobierno había abandonado la colonización oficial en favor de la privada. El progreso general del país la fomentaba, aun cuando había por delante una gran tarea: irrigar el territorio, abrir caminos vecinales, difundir el crédito agrícola, crear centros de enseñanza y de consulta agrícola, etc. También aquí hay una transformación del credo oficial sobre la colonización: media una gran distancia entre el ímpetu optimista inicial del go-

bierno y la resolución de dejar en manos de los particulares la colonización y limitar el favor oficial a medidas indirectas. El presidente distinguió entre la colonización y la inmigración: la primera le pareció raquítica, y la segunda florecía; sin embargo, la cantidad de mexicanos que vivía en el extranjero superaba a la de extranjeros asentados en México. De todos modos, enunció una serie de medidas bien orientadas para resolver el problema agrícola —irrigación, crédito, comunicaciones—; pero, por lo visto, el goce de sus frutos, a pesar de que los pagarían los mexicanos, iba a ser para los extranjeros. Se volvía, así, al punto de partida de Vicente Riva Palacio: no acudirían los inmigrantes sin concluir esa labor previa, con el resultado de que los mexicanos transformarían al país, para que los extranjeros se beneficiaran de la transformación.